Procede la indemnización por el daño moral que sufre una persona por actos contrarios a su buen nombre que se le atribuyen inexactamente por medio de informaciones periodísticas.

DICTAMEN FISCAL

Señor:

La demanda de fs. 2 y su ampliatoria de fs. 6, interpuesta por doña María Octavila Sánchez Novoa contra los periodistas Roberto Aguilar Roncal y Manuel Silva Aranda, fundamentada en los artículos 1136 y 1147 del Código Civil, solicita indemnización por daño moral, de ambos demandados, responsables solidariamente del deprimimento sufrido en su honor en mérito de las publicaciones de que fué objeto la demandante en los días 8, 9, 10, 11, 16 y 17 de julio de 1964, en el diario "Extra" de Cajamarca, publicaciones reiteradas que le atribuyen hechos y cualidades que deforman su personalidad haciéndola aparecer ante la opinión pública como una persona falta de escrúpulos y sin ningún respeto por las más elementales normas que rigen la alturada función que desempeña la demandante como Directora de un Centro de Educación causándole además daño moral por abuso del derecho. Dicha demanda fué contestada como aparece de los términos del escrito de fs. 9, en forma negativa y sosteniendo los demandados que el ejercicio de la actividad cotidiana como periodistas es un libre ejercicio de un derecho y como consecuencia no constituye acto ilícito alguno, lo que fundamentan con dos ejecutorias que citan de los años 1945 y 1950, que dicen se encuentran insertas la primera en los Anales Judiciales y la segunda en la Revista de Jurisprudencia Peruana, pero sin mencionar fechas ni folios donde se encuentran las citadas ejecutorias.

Los ejemplares del Diario "Extra" de las fechas 8 de Julio al 17 de Julio de 1964 que corren de fs. 20 a fs. 43, comprueban la persistente campaña difamatoria realizada por los citados periodistas contra la Directora del Colegio Indo-Americano de Cajamarca y por la cual se planteó la demanda de fs. 2 y ampliatoria de fs. 6. La confesión de los demandados Silva Aranda, de fs. 47 y Aguilar Roncal, de fs. 49 comprueban que ambos son profesores, de 32 y 25 años respectivamente y que ambos pretenden excusarse sosteniendo que han efectuado di-

chas publicaciones por denuncia de varios padres de familia, lo que no han acreditado en ninguna forma y de haber sido cierto les hubiera sido muy fácil hacerlo, siendo sospechoso por decir lo menos, que en su calidad de maestros, además de periodistas, hayan emprendido una campaña tan pertináz contra una maestra, sin tener a la mano ni menos acreditar, haber sido hecha y respaldada por denuncia de padres de familia o de ciudadanos responsables. La prueba de confesión es pues desfavorable para los demandados.

La demandante ha ofrecido y actuado por su parte la declaración de los testigos Víctor Vicente Briones y Víctor Manuel Gaytano Álvarez, de 47 y 55 años respectivamente, ambos como aparece de sus generales de ley, secretarios de Juzgado, o sea depositarios de la fé pública, que no tienen impedimento para declarar y que por la misma función que ejercen se les supone idóneos y calificados como personas que afirman la verdad, que conocen desde hace muchos años a la demandante, que consideran que las publicaciones eran insidiosas y calumniosas y que los padres de familia al contrario en una reunión que tuvieron, expresaron no haber ido a local del Diario "Extra" y haber hecho un comunicado de protesta contra las citadas publicaciones, constándoles a ambos los términos de las preguntas formuladas en el pliego de fs. 50 que han contestado en forma afirmativa y dando razón de sus dichos como aparece de las diligencias de fs. 51 y 52.

Por otra parte los demandados en los meses de noviembre y diciembre de 1964 o sea a los cuatro y cinco meses después de planteada la demanda, han continuado en su persistente actitud como aparece de los ejemplares del Diario "Extra" de fechas 28 y 29 de Noviembre y 1, 2, 3 y 10 de diciembre de 1964, continuando su campaña difamatoria y negándose inclusive a publicar la rectificación y refutación formuladas por la profesora demandante, como aparece del ejemplar de fs. 72, lo que demuestra la continuidad de la campaña, que por el propio tenor de las publicaciones es indiscutible que afectaba seriamente el prestigio y la moral de la demandante.

La sentencia de Primera Instancia que corre a fs. 127 ha declarado infundadas las excepciones deducidas por los demandados e infundada igualmente y con costas la demanda de fs. 2 y absolviendo de dicha acción a los demandados. La Resolución de Vista de fs. 141, con fundamentos legales y haciendo un análisis detenido de la prueba actuada, así como amparándose en las Ejecutorias Supremas de 7 de Julio de 1956 y 12 de Abril de 1962, corrientes en la Revista de Jurisprudencia Peruana fs. 1217 y no 1271 como equivocadamente se cita y fs. 479,

la primera inserta en el número ciento cincuentitres de Octubre de 1956 y la segunda en el número doscientos diecinueve de la mencionada revista y que sostienen que: "Procede la indemnización por el daño moral que sufre una persona por actos contrarios a su buen nombre que se le atribuyen inexactamente", ha revocado la sentencia apelada de fs. 127 declarando fundada en parte y sin costas la demanda y condenando a los demandados al pago solidario de diez mil soles oro, a favor de la actora, por concepto del daño moral irrogado a esta y la confirmaron en lo demás que contiene. De ésta Resolución de Vista los demandados han interpuesto el recurso de nulidad que corre a fojas 145 concedido a fs. 145 vuelta.

El Fiscal Suplente que suscribe considera que casos como éste ya resueltos por la Suprema Corte, deben servir de pauta para que se evite que el derecho sagrado de la libertad de prensa, se desvirtúe y se convierta en libertinaje sin control ni freno alguno y por el mérito de la prueba actuada, especialmente por la testimonial y confesional ya analizadas, así como por el tenor de las persistentes publicaciones que incuestionablemente han causado un daño moral a la demandante, persona conocida en la localidad y Directora de un Colegio y a tenor de los artículos 1136 y 1147 del Código Civil y Ejecutorias Supremas de 7 de Julio de 1956 y 12 de Abril de 1962, opina por que la demanda es fundada en todas sus partes y que debe declararse la NO NULIDAD del Fallo de Vista, revocatorio del de Primera Instancia, que declara fundada en parte la demanda y sin costas y que HAY NULIDAD en dicho fallo, el que debe modificarse en cuanto al monto mandado pagar que considera exiguo, así como a la exoneración de costas, debiendo en esta parte ser modificado dicho fallo y ordenarse pagar una suma mínima de S/. 30,000.00 en forma solidaria por los demandados y con expresa condena en costas, ya que no se justifica la exoneración al respecto. Salvo mejor parecer.

Lima, 25 de Octubre de 1966.

ELIAS APARICIO

RESOLUCION SUPREMA

Lima, veintinueve de noviembre de mil novecientos sesentiséis.
Vistos; de conformidad en parte con lo dictaminado por el Mi-

nisterio Público: declararon **NO HABER NULIDAD** en la sentencia de vista de fojas ciento cuarentiuna, su fecha dieciocho de agosto del presente año que, confirmando en una parte y revocando en otra la apelada de fojas ciento veintisiete, su fecha doce de mayo último, declara fundada en parte la demanda de indemnización interpuesta por doña María Sánchez Novoa contra don Manuel Silva y otro; y en consecuencia que los demandados deben abonar solidariamente a la actora la suma de diez mil soles; con lo demás que contiene; condenaron en las costas del recurso a la parte que lo interpuso; y los devolvieron.— **MAGUIÑA SUERO.— GARCIA RADA.— VIVANCO MUJICA.— ALARCON.— PERAL.**— Se publicó conforme a ley.— Lizandro Tudela Valde-rama, Secretario.

Causa 710/66.— Procede de Cajamarca.